



**JUZGADO PRIMERO LABORAL MUNICIPAL  
DE PEQUEÑAS CAUSAS DE CÚCUTA**

El auto anterior se notificó por anotación en ESTADO No.  
**010 del 12 de FEBRERO DE 2024** a las 8:00 a.m., y se  
desfija el mismo día siendo las 6:00 p.m.

JORGE LEONARDO GAUTA BURGOS  
Secretario



**Departamento Norte de Santander  
Distrito Judicial de Cúcuta  
JUZGADO PRIMERO LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE CÚCUTA**

Radicado: 54-001-41-05-001-2023-00601-00  
Clase de proceso: EJECUTIVO  
Demandante: CERTIRETIE S.A.S.  
Demandado: DIEGO JOSÉ URBINA SÁNCHEZ

San José de Cúcuta, nueve (9) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024)

Procede el Despacho a resolver el recurso de REPOSICIÓN propuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 23 de octubre de 2023 (archivo 005) mediante el cual se abstuvo el juzgado de librar orden de apremio, atendiendo que no se acreditaron los requisitos del título ejecutivo, al no aportarse el certificado de competencias, el cual compone la primera condición para la conformación del título valor, y ante la falta de claridad de los demás compromisos de los cuales busca su pago.

Como argumento de su ataque, el demandante afirma que el juzgado sustenta su decisión en un salvamento de voto y exige documentos que no matizan la situación creadora de los títulos, puesto que lo que se ejecuta es porque el trabajador incumplió la cláusula del convenio que impuso prohibición de renunciar durante los dos años siguientes a la capacitación.

Para desatar el recurso, lo primero que se debe advertir es que el extracto jurisprudencial traído a colación en la decisión bajo ataque, si bien pertenece al salvamento de voto realizado por el doctor Luis Alberto Toloza Villabona a la sentencia STC20214 del 2017, es cierto también, que este se usó como un elemento de apoyo a las fuentes formales, como lo es la norma, la cual en ultimas fue el insumo principal para la negativa en la orden de apremio.

Vale resaltar que la postura en cita, ha sido reiterada en varias ocasiones por la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en decisiones tales como la AC3609 del 28 de agosto de 2018, la AC371 del 12 de febrero de 2019, entre otras.

Se pregona del proceso ejecutivo, que el mismo tiene su razón en la certidumbre, pues su objeto no es declarar derechos dudosos o controvertidos, sino hacer efectivos los que ya están declarados o reconocidos por las partes en un negocio jurídico unilateral o bilateral.

Rememórese, que el artículo 100 del C.P. del T. dispone que será exigible ejecutivamente la obligación surgida de una relación de trabajo que conste en acto o documento **que provenga del deudor** o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme, por su parte, el artículo 422 del C.G.P., aplicable por analogía expresa del artículo 145 del C.P. del T., impone que esta obligación sea **clara, expresa y exigible**, que consten en documentos **que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él**, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que

en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.

En lo tocante a la exigibilidad, de acuerdo con el citado artículo 422, la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida. Desde tiempo atrás ha indicado la Corte Suprema de Justicia, “(...) [L]a existencia de una obligación pura y simple, caracterizada porque nace y se hace exigible inmediatamente, no sometida a modalidad alguna de plazo, condición o modo; obligación cuya exigibilidad prestacional es inmediata al no estar sujeta a dependencia o hechos externos (...)”<sup>1</sup>.

Sobre los contornos de las obligaciones susceptibles de ser cobradas, por vía compulsiva, sometidas a plazo o condición, la Corte destacó:

*“(...) La condición, como bien lo define el artículo 1530 [del Código Civil,] consiste en un acontecimiento futuro, que puede suceder o no (...), mientras que el plazo, aunque también conlleva una idea de futuridad, entraña [un concepto] de ocurrencia cierta, porque, de antemano, se sabe que llegará el día señalado o expiración del plazo convenido (...)”. “(...) No sucede lo mismo tratándose de la condición, cuya característica esencial es precisamente la incertidumbre, la posibilidad de suceder o no, albur que no puede adivinarse con antelación (...)”. “(...) También diferenciase la obligación a plazo de la condicional, en que la primera nace, como las puras y simples, coetáneamente con la formación de la fuente de donde dimana, que generalmente es el contrato, mientras que la obligación sujeta a condición suspensiva, tiene su nacimiento en suspenso hasta que ocurra el acontecimiento futuro e incierto en que consiste la condición, ya que antes de ese momento no tiene vida jurídica, ni, por ende, posibilidad de exigirse su cumplimiento (...)”. “(...) Adviértase, pues, que en las obligaciones puras y simples, es uno mismo el tiempo en que se forme el manantial de donde proceden, uno mismo aquél en que la obligación nace y, uno mismo, el de su exigibilidad; en las de plazo, a pesar de que [surgen] al mismo tiempo con la fuente de donde dimanan, el momento en que pueden hacerse exigibles es posterior, pues el acreedor solo podrá demandar su cumplimiento cuando expire el plazo; finalmente, la obligación condicional, bajo condición suspensiva, no [aflora] simultáneamente con la fuente de donde derivase, pues esta queda formada con antelación [pero] solo nacerá en el evento de ocurrir el acontecimiento futuro e incierto del cual se hizo depender su [existencia] (...)”*

En el caso concreto, se presentó como base de recaudo el documento *CONVENIO DE COMPROMISO PRUEBAS DE COMPETENCIAS PROFESIONALES*, y fundamenta su cobro en la cláusula 5, que señala lo siguiente:

*“En caso de retiro voluntario por parte del trabajador antes de 2 años posteriores a la fecha de expedición de Certificado de Competencias CERTIRETIE SAS podrá exigir ejecutivamente al trabajador la cancelación de una sanción a título de pena e indemnización de perjuicios equivalente a la suma de (2) dos veces el valor total de la(s) prueba(s) a valor presente del año en que se retire”*

De esta, se desprende que se está ante la presencia de un título ejecutivo complejo o compuesto, esto es, conformado por varios documentos para exigir ejecutivamente al trabajador la cancelación de la sanción a título de pena e indemnización por renunciar, pues deben acreditarse dos condiciones, en orden temporal, la primera que se haya expedido el certificado de competencia a favor del trabajador, y a partir de la data de promulgación de este documento, empezarán a correr los 2 años, y como segundo requisito, que el trabajador renuncie en ese lapso de tiempo. Es así que, el primero en cita se refuta ausente y resulta artificial pensar que la fundamentación expuesta por la parte actora, es suficiente para su acreditación.

---

<sup>1</sup> CSJ. STC5313-2020 de 2 de mayo de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-00325-03.

Por lo dicho, se puede concluir no le asiste la razón al recurrente puesto que el documento arrimado al despacho no reúne los requisitos normativos para denominarse título ejecutivo, pues reitérese, no aportó el documento “certificado de competencia”, y hasta tanto la ocurrencia de tal condición no se encuentre acreditada, la obligación carecerá de los elementos estructurales para servir como título ejecutivo, debiendo mantenerse la decisión objeto de reproche.

Ahora bien, frente a la manifestación realizada por el recurrente, en el sentido de que el juez debe librar mandamiento de pago, y es el demandado el llamado a defenderse en el evento de no estar satisfecho con la orden de apremio, resulta pertinente indicar que el Juez tiene dentro de sus deberes, escrutar los presupuestos del título ejecutivo, de manera preliminar al momento de emitirse la orden de apremio, pues es este, el título ejecutivo el elemento esencial del proceso ejecutivo artículo 422 CGP.

Téngase en cuenta que, dentro del proceso ejecutivo, la primera providencia de fondo que profiere el juez de conocimiento es el mandamiento de pago y constituye la orden judicial de cumplimiento de la obligación demandada, en los **procesos ejecutivos** no se busca la declaración del derecho pues dicho derecho ya está contenido en un título valor o en cualquier documento que preste mérito **ejecutivo**. El proceso ejecutivo busca es la ejecución del deudor que incumplió una obligación, la cual debe estar contenida en un documento que reúna los requisitos establecidos por el legislador, a diferencia de los **procesos ordinarios** donde la pretensión es discutible.

En este orden de ideas, no se repondrá el auto motivo de censura.

Finalmente, se negará el recurso de apelación formulado de manera subsidiaria, bajo el entendido de que nos encontramos en un trámite de única instancia el cual no es susceptible del recurso de alzada.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO PRIMERO LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE CÚCUTA**,

RESUELVE:

**PRIMERO: NO REPONER** el auto proferido el veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023), por lo señalado previamente.

**SEGUNDO: NEGAR** el recurso de apelación, de conformidad a lo expuesto.

**TERCERO:** Contra esta decisión no procede ningún recurso.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Firmado Por:

Karine Yurley Rico Jaimes

Juez

Juzgado Pequeñas Causas

Laborales 001

Cucuta - N. De Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **88fe3acd81b5f8c22d7000c4c5f1c89011b0ff7b0230e443d833f47f0247a8e3**

Documento generado en 09/02/2024 06:09:07 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**